

nivel de conflictividad interna, sino también con la novedad de que la polarización social regional se ha transformado también en una polarización política. Mientras que el norte del país votó por el PAN, el centro y sur del país se inclinó hacia el PRD, correspondiendo esta distribución del voto al relativamente alto nivel de desarrollo en las regiones norteañas y el retraso en el sur. Aunque este mensaje pueda parecerle más esquemático al nuevo presidente (ya que el PRI pudo mantener un decoroso segundo lugar en estados importantes), resulta claro que Felipe Calderón tendrá que lidiar con los “dos Méxicos” no solamente en términos políticos sino también sociales. Sus llamados a la unidad nacional a mediano plazo no serán suficientes, si no logra reducir el desequilibrio interno a través de una política sustancial de distribución de la renta y de oportunidades económicas. Sus promesas en cuanto al sistema de salud y un equitativo acceso a estos servicios serán vigiladas muy de cerca por la población. A raíz de la situación conflictiva interna tendrá que afrontar el reto de presentar resultados a corto plazo para poder mostrarle resultados a la población y calmar así la inquietud política. Aunque quede sin respuesta la pregunta sobre si López Obrador ha sido un fenómeno electoral que perderá en el futuro su arrastre social, el nuevo gobierno tendrá que partir de una situación continua de cuestionamiento de su legitimidad. La búsqueda de consensos y la apertura de la gestión gubernamental hacia la sociedad serán centrales desde esta óptica, en el afán de encontrar una base social más amplia de la que refleja el resultado electoral. La sensación de que el nuevo gobierno sería un gobierno débil podría poner en entredicho la gobernabilidad del país, no tanto desde los focos de conflictividad abierta existentes como en la frontera norte y en Oaxaca, sino tam-

bién en la tarea de consensuar estrategias de acción con los diferentes niveles de gobierno en México (gobernadores, municipios). Ante los niveles que ha alcanzado la inseguridad en el país con el crimen organizado y la presencia de la droga en los organismos de seguridad y persecución al delito será esencial que el nuevo presidente tenga tanto la capacidad para instrumentar las reformas necesarias como también el compromiso de adelantar una política de gobernabilidad democrática incluyente. La tarea no podría ser mayor, habrá que esperar si se tienen a mano los instrumentos oportunos.

Günther Maihold, subdirector del Instituto Alemán para Política Internacional y Seguridad/SWP, Berlin-RFA. Correo electrónico: guenther.maihold@swp-berlin.org.

Enrique Collazo

Hoy, como ayer. Repunte del capitalismo de Estado en Cuba

La intervención del Estado en la economía y la sociedad cubanas se ha consagrado definitivamente como una regularidad histórica. Desde las primeras décadas del siglo XIX varios intelectuales y patriotas criollos, como José Antonio Saco y Domingo del Monte, valoraron seriamente la importancia de una esfera de gasto público dentro del presupuesto de los Estados modernos. Sin embargo, a partir de la constitución de la República en 1902 y hasta 1925, el joven y atribulado Estado cubano, acorde con la tendencia predominante en aquel momento, se rigió por un

canon alegremente liberal, que se supeditaba al Tratado de Reciprocidad Comercial firmado con Estados Unidos en 1902. En aquél período se produjo el segundo milagro económico insular. Durante el mismo los molinos de caña no pararon, empeñados en satisfacer la demanda de azúcar de un mercado norteamericano en plena expansión, cuyo crecimiento llegó a su fin después del espasmo de las vacas gordas y la deflación que siguió a la Primera Guerra Mundial.

Los dirigentes económicos del Gobierno de Gerardo Machado (1924-1933), persuadidos de la urgencia por estimular el desarrollo de otros rubros productivos y compensar la caída de los ingresos azucareros, implementaron un ambicioso plan de obras públicas e infraestructuras, junto con la audaz reforma arancelaria de 1927. Dicha normativa, junto con una política orientada a la restricción de la producción azucarera, intentaba estimular la autosuficiencia de algunas producciones agrícolas y manufactureras, señales todas ellas que indicaban la temprana implicación del Estado en la corrección del rumbo económico de la nación.

Asimismo, los luchadores antimachadistas de los años veinte y treinta, como Mella, Villena, De la Torriente Brau, Guiteras, Martínez Sáenz y otros, al vincular la fuerte referencia nacionalista con la marxista o con la fascista, vislumbraron el cambio político en Cuba como la génesis ya no de un Estado nacional, sino de una nueva y definitiva Nación Estatal; lo que ha sido y es el orden totalitario. Organizaciones de signo ideológico tan variopinto como el Partido Comunista, la Joven Cuba y el ABC, consideraban que la independencia económica cubana podría alcanzarse adoptando el principio del intervencionismo estatal, bien en su variante marxista o a partir de los postulados keynesianos. Tras la caída de Macha-

do, la restricción del mercado azucarero de los Estados Unidos y su funcionamiento a partir de 1934 mediante un sistema de cuotas (Ley Costigan-Jones) provocó que el Gobierno del momento se viera obligado a implementar en 1937 la Ley de Coordinación Azucarera, con el fin expreso de regular la producción del dulce y proteger a los productores agrícolas e industriales más débiles de la competencia de los centrales que controlaban un mayor número de hectáreas de cultivo y exhibían una mayor capacidad productiva. Tal decisión evidenciaba que la orientación de la política económica insular se decantaba por la adopción de políticas distributivas antes que por la aplicación de mecanismos efectivos de competencia económica y reproducción oligárquica.

De esta forma, y habiendo acumulado el Estado en Cuba un notable expediente en cuanto a injerencia en temas de política económica, se produjo el golpe de Estado del 10 de marzo de 1952. Al Gobierno del depuesto presidente Prío lo sorprende la asonada en pleno despliegue de una política económica de matriz keynesiana, la cual, como se sabe, se basa en el efecto multiplicador del gasto público sobre el crecimiento del ingreso nacional. Para ello se había fundado en 1950 el primer Banco Central con que contaba la República, el Banco Nacional de Cuba, y también una institución bancaria paraestatal o semipública, el llamado Banco de Fomento Agrícola e Industrial de Cuba (BANFAIC), concebido para propiciar el desarrollo de otras variables productivas ajenas al azúcar.

Batista, una vez en el poder y obligado a encarar la recesión que se avecinaba tras el final de la guerra de Corea, consideró conveniente ir más allá, y creó toda una red de organismos bancarios paraestatales especializados –como el BANDES, el BANCEX y la Financiera Nacional,

entre otros—. Tales instituciones sirvieron de soporte orgánico y funcional al Estado para el despliegue del Plan para el Desarrollo Económico y Social. El mismo pretendía mantener el nivel de actividad económica mediante la captación de recursos por parte del Estado, utilizando el mecanismo del endeudamiento público. Dichos fondos se movilizaron con el objetivo de atenuar los efectos de una nueva y recurrente depresión azucarera.

Nunca un gobernante cubano había llegado tan lejos en lo que a materia de intervencionismo estatal se refiere. No obstante, la rotunda popularización de las teorías del economista británico John Maynard Keynes, los antecedentes de implicación del Estado caribeño en la regulación económica y el relativo agotamiento del modelo primario exportador, condujeron al régimen a convertirse de hecho en un Gobierno que entrelazó fuertemente sus intereses con el gran capital nacional y con el capital financiero norteamericano. A tal punto llegó este proceso de socialización del capital y el efectivo control ejercido por medio de la banca de desarrollo sobre sectores claves de la economía de la época —como el turismo, el transporte y la industria transformativa—, que una vez que Castro y sus fuerzas se hicieron con el mando del Banco Nacional y designaron interventores en cada una de las entidades semipúblicas del anterior régimen, consiguieron controlar no sólo las finanzas a nivel nacional, sino, además, un buen número de empresas fomentadas por aquellos años. Este factor constituyó un útil antecedente material para el nuevo poder: le permitió avanzar rápidamente por el camino que condujo a la supresión total del capitalismo y la abolición radical del mercado.

De tal suerte, los ideólogos marxistas contemplaron el caso cubano como una especie de combinación perfecta en la que

una situación revolucionaria propició la creación de un foco guerrillero, el cual se transformó en breve tiempo en un movimiento popular que terminó por conquistar el poder político. Entretanto, tal revolución se produjo en medio del creciente desarrollo de un Estado intervencionista y socializador del capital y la producción, factor que devino premisa material mínima, capaz de facilitarle a ese nuevo poder un tránsito acelerado al socialismo, sin desdeñar la elevada dosis de voluntarismo que siempre ha distinguido a la dirigencia cubana. De esta forma, la tendencia de implicar al Estado para corregir determinadas patologías propias del organismo económico del país y a la vez paliar la caída del ingreso, el desempleo y el malestar social en situaciones de crisis aguda, con el fin expreso de preservar el control sobre la sociedad y retener el poder —práctica que con los dictadores Machado y Batista parecía haber alcanzado sus mayores cotas de desarrollo— se quedó en nada con Castro, quien después de haberse pasado tres décadas desmantelando con saña el capitalismo e impidiendo tenazmente la reaparición del mercado, recurrió a partir de 1993 a la vieja fórmula del capitalismo de Estado.

Cabe recordar que a partir de 1960 y mediante el proceso de expropiaciones, desapareció el sector financiero de la economía en todas sus modalidades, tanto desde el punto de vista orgánico de las empresas como del de las instituciones, entre ellas las de la propiedad privada y las del crédito. Igualmente, se redujo drásticamente el sector de comercio, tanto al detalle como el mayorista, junto con las modalidades de transporte y servicios complementarios. El sector de servicios fue severamente reducido y actividades de tipo contable, legal, de publicidad y otras desaparecieron o fueron estatizadas. Debe destacarse que mientras la empresa se

socializó en relación con la propiedad, se des-socializó en el sentido de que perdió su capacidad de satisfacer la demanda de la población, particularmente después de la “Ofensiva Revolucionaria” de 1968.

Fue la profunda crisis económica que sacudió al país como resultado de la pérdida de los cuantiosos subsidios soviéticos, lo que obligó al Gobierno a aprobar disposiciones de reacomodo selectivo que introdujeron nuevos cambios en la red institucional y orgánica de su economía. La reaparición limitada de formas de propiedad privada anunciaba, a pesar de la renuencia del régimen a aceptarlo, que en Cuba también había caído el comunismo. Paradójicamente, la pérdida de los subsidios soviéticos forzó al régimen a adoptar medidas de ajuste muy severas, de la clase que aconseja el Fondo Monetario Internacional en situaciones similares de desequilibrio y que tan censuradas han sido por el propio poder.

A principios de los noventa se bromeaba en Cuba con aquello de que “el socialismo es la formación económico-social que media entre el capitalismo y el capitalismo”, y el curso de los acontecimientos ha convertido la broma en realidad. La nueva Constitución, aprobada en 1992, la despenalización de la tenencia de dólares en el verano de 1993 y el impulso dado a las empresas mixtas, entre otras medidas liberalizadoras, propiciaron un proceso de recomposición de las clases sociales, jalado por la aparición de un sector tecnócrata-empresarial que se beneficia de los vínculos con el mercado mundial y que cuenta con posibilidades reales de convertirse en capa social hegemónica. El Estado cubano se ha transformado en una gran empresa y la comandancia de la misma está concentrada en los círculos políticos y militares que rodean al Magnate en Jefe, sobre todo en los de color verde olivo, aunque la capacidad ejecutiva está ramifi-

cada entre un sin fin de corporaciones, sociedades mercantiles y anónimas, contratos de administración, producciones cooperadas y diferentes niveles de asociación y de consorcios con empresas extranjeras, tanto en la isla como en el exterior.

De forma gradual, al igual que en la Cuba de Batista, se ha ido consolidando un sector intermedio, semi-privado o semi-estatal, que se halla más allá del bien y del mal. Una casta de oligarcas civiles y militares que comienzan a ser mirados con envidia y rencor por la gran masa de la población depauperada. Este grupo verdaderamente privilegiado, bien remunerado en términos monetarios y en servicios, goza del derecho exclusivo, basado en el poder de un único partido político y en el control sobre la seguridad del país, de distribuir la renta nacional a su antojo, de fijar salarios, de dirigir la vida económica, y de manipular la riqueza acumulada por la nación.

A finales de los años cincuenta, diversos exponentes del gran capital nacional y de la burguesía burocrática, tales como Manuel Aspuru San Pedro, Gaspar Vizoso Colmenares, José M. Bosch, Francisco Acosta Rendueles, José Ignacio de la Cámara, Alejandro Suero Falla, Nicolás Arroyo, José Manuel Casanova, Julio Lobo, Agustín Batista, Andrés Domingo Morales del Castillo, Justo García Rayneri, José Gómez Mena, Alfonso Fanjull, Óscar García Montes y Orlando Piedra, coronel y jefe del Buró de Investigaciones, se implicaron en el proceso de creación de empresas mixtas financiadas por la banca paraestatal con la participación de la oligarquía financiera norteamericana, conformando un selecto grupo al que solamente le interesaba maximizar sus beneficios y mantener el orden establecido. Aquellos capitales sirvieron para el fomento de empresas y obras de infraestructura tales como Antillana de Acero,

Papelera Pulpa Cuba, Compañía Industrias Siporex, Cemento Santa Teresa, Papelera Damují, Grupo Petrolero Jarahueca-Motembo, Compañía Cubana de Nitrógeno, Hotel Habana Hilton, Fomento de Obras Constructivas S. A. (FOCSA), etc.

Del mismo modo, en la actualidad ese sector está siendo ocupado socialmente por una elite de clase media-alta, educada y profesional, compuesta en muchos casos por militares de alto rango, como los coroneles Armando Pérez Betancourt, Álvaro Pérez Morales y Ernesto López; los generales Julio Casas Regueiro, Ulises Rosales del Toro, Moisés Sio Wong, Rogelio Acevedo, Luis Pérez Róspide y Luis Bernal León, así como el comandante de la Revolución Ramiro Valdés, entre otros. Entre las empresas o ramas que dirigen se encuentran: Ministerio de la Industria Azucarera, Instituto Nacional de Reservas Estatales, Corporación de la Aeronáutica Civil, Gaviota, COPEXTEL, Unión de la Industria Militar, CIMEX, CUBANACÁN, Gran Caribe, Habaguanex, Horizontes, Grupo Nueva Banca, Instituto Cubano de Radio y Televisión, y demás. Estos altos oficiales, gracias a su lealtad al régimen y a pesar de su origen e ideología “proletarios”, componen ese nuevo paradigma del tecnócrata “revolucionario” que los académicos han denominado el *compañero-empresario* o *empresario-soldado*. Éste participa en la redistribución de las propiedades, otrora estatales, en el marco de un proceso de privatización que no excluye como uno de sus fines mantener la unidad corporativa entre esa casta de “empresarios socialistas” y la inquebrantable fidelidad al Padre Gerente.

Tales corporaciones son todas propiedad estatal, aunque actúan como unidades independientes, de igual forma a como ocurre con las compañías estatales en una economía de mercado. Ellas toman présta-

mos de los mercados financieros internacionales por cuenta propia y son auditadas por firmas de contabilidad occidental que tienen una probada acreditación, además de la flexibilidad para desarrollar o emprender cualquier negocio que deseen. Si logran sus propias metas de beneficios y operan con márgenes de ganancias aceptables, siguen operando. En caso contrario los empleados son despedidos, se nombra una nueva administración y se hacen los cambios pertinentes.

En un intento por definir esta relación del caudillo con sus subalternos, en la que al igual que un padrino mafioso aquél puede dar pero también quitar, el economista Carmelo Mesa-Lago ha señalado que “Cuba se ha convertido, de hecho, en un régimen patrimonial, en el que el Comandante tiene su patrimonio y lo distribuye como le place”. No hay que olvidar que en una sociedad socialista las fuentes de poder residen en el aparato político-militar, no en el económico, por lo que la política y el ejército atraen a los individuos más ambiciosos o con más iniciativa empresarial, especialmente a los que tienen menos escrúpulos éticos en relación al nuevo orden.

A pesar de los fenómenos de corrupción, Fulgencio Batista se esforzó por involucrar en su política financiera, de una manera u otra —principalmente por la venta de bonos— a diversas organizaciones sociales y sectores económicos, incluso de la mediana y la pequeña empresa, todo ello dentro del contexto de una economía de mercado. De igual modo, promovió el desarrollo de ciertas ramas industriales como la textil, la alimenticia, la de materiales de construcción, la metalúrgica, etcétera, propiciando el surgimiento de otras como la de aprovechamiento del bagazo de caña y la industria química, además de echar las bases de una infraestructura turística a lo largo del país. Como

era lógico, aquel régimen defendió los intereses de los grupos monopolistas norteamericanos que tenían inversiones en Cuba, así como los de los poderosos capitalistas cubanos con que desarrolló estrechos vínculos.

Sin embargo, la intransigencia y el secretismo más hermético es lo que mejor define el desenvolvimiento de la actual política económica. Por otra parte, no resulta coherente que un régimen que se auto-titula “representante de los intereses del pueblo y de su dignidad y decoro” impida que los trabajadores cubanos de empresas mixtas puedan ser contratados libremente por éstas y cobren la totalidad de su sueldo en dólares, así como que a diferentes inversores extranjeros se les ofrezca participar en negocios públicos —el caso de la compañía telefónica mixta italo-cubana ETECSA (*Empresa de Telecomunicaciones de Cuba S. A.*) es paradigmático— y con tal fin se les tiene con las rentas de situación de una posición monopolista. Tales empresas operan con grados de libertad desconocidos en Cuba desde las nacionalizaciones de 1960. Firmas como ETECSA, entre otras, al permitirles operar sin competencia abusan sistemáticamente del cliente, pues como el régimen no reconoce oficialmente que hay capitalismo no ha legislado las necesarias normativas que limitarían el poder de las compañías o que protegerían a los clientes y trabajadores, con lo cual se produce la increíble paradoja de que aquéllas, como proveedoras de capital para el Gobierno, ejercen presión sobre él y no al revés.

O sea, que el nuevo Estado capitalista fomenta las inversiones mixtas en la medida en que la acumulación de capital se produce en empresas extranjeras, participadas también por la “vanguardia empresarial”, mientras que se aceptan las remesas de los exiliados, pues los receptores compran con ellas alimentos y otros

bienes de consumo en las tiendas del Gobierno. Sin embargo, no se toleran actividades productivas a partir de la libre contratación de los agentes económicos, como en la agricultura, sujeta al restrictivo régimen de las cooperativas agropecuarias, o en la oferta de los servicios más indispensables a la población, pues eso genera ahorros, confianza e independencia económica y Castro, que tiene muy bien aprendida la lección y sabe que la libertad es indivisible, se niega tercamente a introducir una reforma estructural de la economía. Es obvio que los regímenes autocráticos se vuelven sistemáticamente frágiles porque se van cerrando en la desconfianza hacia todo y hacia todos, estrechando así sus márgenes de maniobra.

A la élite empresarial batistiana y a la élite empresarial castrista, a pesar de sus diferencias de clase, las une el hecho de que cada una, en su época histórica, se han aliado a regímenes que demostraron no importarle en absoluto la suerte de la nación, sino retener el poder a cualquier precio. Una diferencia reside en que la actual vanguardia empresarial verde olivo, mientras encubre sus operaciones bajo el manto de una falsa retórica nacionalista y antiimperialista, vive de espaldas a la masiva población urbana y rural, la misma que se debate diariamente en el mundo de las colas, la cartilla de racionamiento y la bolsa negra; el de los apagones, la carencia de combustible y de agua; el de las jineteras y los proxenetas, la droga y el hambre.

La otra diferencia estriba en que aquella élite capitalista, tras la entrada de Castro en La Habana, tuvo que huir. De ella no quedaron más que lujosas mansiones, como mudos testigos de una época intensa y vertiginosa. Sin embargo, cuando desaparezca el dictador, los nuevos generales-empresarios permanecerán en la isla y probablemente habrá que contar con ellos,

pues están organizados, mantienen el control del país y, además, son poderosos. ¿Qué duda cabe entonces de que algunos de los generales del MINFAR pretenderán asumir un rol importante en cualquiera de los escenarios de una Cuba post-Castro?

Enrique Collazo Pérez, nacido en 1954, licenciado en Historia por la Universidad de La Habana en 1977. Autor de: Cuba banca y crédito 1950-1958. La Habana: Editorial Ciencias Sociales, 1989; Una pelea cubana contra los monopolios. Oviedo: Universidad de Oviedo, 1994. Artículos publicados en revistas cubanas, españolas, norteamericanas y francesas. Colaborador de los periódicos digitales www.cubaencuentro.com y www.libertaddigital.com

Roberto García Bonilla

Condenas, ficciones y rescates de la memoria. Entrevista con Beatriz Sarlo

Beatriz Sarlo (Buenos Aires, 1942) es una de las voces intelectuales más relevantes y críticas de América Latina en este momento; los campos de estudio que ha abarcado son muy diversos. Ha escrito sobre literatura popular sentimental, folletín, historia del periodismo y de los medios de comunicación de masas, cine, cultura popular y culturas urbanas; también ha realizado estudios sobre Sarmiento, Echeverría, Arlt, Borges, Saer, Cortázar, que han fructificado en un gran número de libros frecuentemente citados. Es directora, desde 1978, de la revista *Punto de vista*. Ha impartido cursos en la Universidad de Buenos Aires y en Universidades de Estados Unidos como Columbia, Berkeley, Maryland, Minnesota. Ha sido *fellow* del

Wilson Center (Washington) y Simón Bolívar Professor of Latin American Studies en la Universidad de Cambridge, Inglaterra; también ha sido becaria del Wissenschaftskolleg, Berlín. Obtuvo la beca Guggenheim, el Premio a la Trayectoria del Fondo Nacional de las Artes y el diploma al mérito Konex. La siguiente entrevista se realizó en el pasado mes de febrero de 2006 en la Ciudad de México, donde Beatriz Sarlo dio a conocer la edición mexicana de su último libro, *Tiempo pasado. Cultura de la memoria y giro subjetivo: una discusión*, honda reflexión sobre la necesidad de la recuperación de la memoria histórica sin efectismos anímicos, desde la llaneza que la cotidianidad exige.

Sobre los estudios culturales y de género

R. G. B.: ¿Cuáles han sido, en su opinión, las aportaciones de los estudios culturales y los estudios de género?

B. S.: Para ser honestos, creo que los estudios culturales comienzan en Inglaterra, no en Estados Unidos. La matriz de los estudios culturales está en ese libro de Richard Hoggart, *The Uses of Literacy* de los tardíos cincuenta [1957]. Cuando se publicó fue considerado una enorme renovación. Ese libro fue un verdadero impacto en Inglaterra, y en ese momento Hoggart funda –con Stuart Hall– un centro de sociología de la cultura [Center for Contemporary Cultural Studies] en la Universidad de Birmingham. Es un centro poderosísimo donde se desarrollan muchas investigaciones que inauguran, propiamente dicho, las investigaciones del análisis cultural. Y Raymond Williams por su lado, que ya está en Cambridge, estudia televisión, cultura de masas, ciencia-ficción, literatura regional, etc. Entonces, los estudios culturales no se fundan en Estados Unidos. Eso más bien sería la historia